

**Embajadora Deborah Chatsis**  
**Embajada de Canadá en Guatemala**

**Embajador Todd Robinson**  
**Embajada de Estados Unidos en Guatemala**

21 de agosto de 2017

Asunto: Necesidad urgente de apoyo a las y los defensores de los derechos humanos tras la suspensión de las licencias de las minas de Escobal de Tahoe Resources y la protesta pacífica en curso en Casillas

Estimada embajadora canadienses y estimado embajador estadounidenses,

Las organizaciones abajo firmadas les escriben con graves preocupaciones con respecto a las comunidades Xinka en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, el Parlamento Xinka, los residentes no indígenas en el área afectada por el proyecto Escobal de Tahoe Resources y miembros del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).

Recientemente, una protesta pacífica en Casillas, Santa Rosa y una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala llevó a la suspensión de las operaciones mineras. Desde entonces, las campañas de difamación contra manifestantes y CALAS se han intensificado en la región, que ya ha experimentado una extensa criminalización y violencia contra quienes se oponen a la mina. Tememos que hayan más acciones violentas y criminalización de manifestantes pacíficos por parte del Estado guatemalteco en respuesta a la empresa o actores relacionados. Por lo tanto, les pedimos que insista en el debido proceso y tome medidas para desalentar investigaciones legales sin fundamento. Además, le pedimos que exhorte a la empresa, sus proveedores, trabajadores y cualquier otro asociado a desistir de su campaña de difamación contra el pueblo Xinka, el Parlamento Xinka, los residentes locales de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, así como CALAS Y sus miembros. Por último, les pedimos que demuestren un apoyo público y diplomático a las acciones pacíficas de las comunidades en defensa de sus derechos a vivir en un ambiente saludable y a elegir la forma de desarrollo que desean.

El miércoles 5 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que estaba suspendiendo temporalmente dos de las licencias mineras de Tahoe Resources hasta que se resuelva una demanda contra el Ministerio de Energía y Minas por discriminación y falta de consulta previa con las comunidades indígenas Xinka en el área de la mina de plata de Escobal. Las dos licencias suspendidas incluyen la licencia de Escobal donde se construyó la gran mina de plata subterránea y opera en el municipio de San Rafael las Flores; La segunda es la licencia de exploración Juan Bosco en los municipios de San Rafael Las Flores, Mataquesuintla, Nueva Santa Rosa y Casillas. Los tres últimos municipios celebraron consultas municipales antes de la concesión del permiso de explotación de Escobal, en lo cual, miles de personas votaron en contra de cualquier minería en su área. A pesar de esta postura clara contra la minería en la región, los resultados de las consultas han sido

ignorados y las operaciones mineras continuaron sin obstáculos hasta la actual suspensión en julio.

El 7 de junio de 2017, un mes antes de la decisión del CSJ, las y los residentes de seis municipios de la zona de la mina El Escobal organizaron una manifestación pacífica permanente en el cercano municipio de Casillas, bloqueando únicamente el tráfico relacionado con la mina. Sus acciones suspendieron eficazmente las operaciones mineras. El 22 de junio, unos 200 policías antimotines utilizaron gases lacrimógenos contra las y los manifestantes. Por lo menos dos niños pequeños, incluyendo un bebé, tuvieron que ser tratados para la intoxicación y un hombre en una silla de ruedas fue amenazado y acosado por la policía. A pesar del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, más de 3.000 personas regresaron al campamento tan pronto como el gas lacrimógeno se había despejado, volviendo a tomar turnos rotativos de 24 horas y continuando su protesta pacífica. Luego, el 21 de julio, miembros de la Policía Nacional Civil atacaron a los 15 o 20 hombres, mujeres y niños presentes en el pacífico campamento de Casillas a eso de las dos de la madrugada para permitir que dos camionetas transportando combustible llegaran hasta la mina. Los miembros de la comunidad informaron que cuatro personas fueron intoxicaron con gas de pimienta y otras tres fueron golpeadas por la policía y llevadas al hospital.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos preocupa que Tahoe haya negado consistentemente la presencia de las comunidades Xinka en el área de influencia del proyecto Escobal y no haya informado sobre la fuerza de la oposición de las comunidades Xinka y no indígenas afectadas por sus operaciones mineras. El Parlamento Xinca ha estado participando activamente en la resistencia al proyecto minero desde al menos 2012 y ahora se ha sumado a la acción legal por la falta de consulta de la comunidad. Nos preocupa aún más que la empresa continúe haciendo declaraciones amenazadoras sobre posibles persecuciones legales y otras posibles repercusiones contra las protestas pacíficas y apegadas a la ley.

En una conferencia convocada por Tahoe Resources con analistas de inversionistas el 6 de julio, un analista preguntó a la compañía si Tahoe, sus empleados, sus proveedores o cualquier persona relacionada con la compañía podrían tener status en Guatemala para entablar una demanda contra CALAS, sus miembros o cualquier miembro del pueblo Xinka. **En respuesta, el Presidente y CEO Ron Clayton declaró que sus proveedores ya se estaban preparando para entablar una demanda para apelar la decisión de la Corte Suprema y que: "Nuestros proveedores, vendedores, contratistas y empleados están involucrados en luchar agresivamente en contra de eso".** Poco después, representantes de los proveedores de Tahoe Resources presentaron una acción legal el lunes 9 de julio para tratar de revocar la suspensión de la mina.

Además, Amnistía Internacional ha informado que los proveedores de Tahoe Resources y la Cámara de Industria de Guatemala han emprendido una campaña de difamación contra CALAS y sus miembros en la prensa por haber presentado la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas. Los miembros de CALAS han sido objeto de ataques regulares, entre

ellos el asesinato de Jeremy Abraham Barrios Lima, 22 años, asistente del Director de CALAS en noviembre de 2016.

También recordamos que desde que Tahoe se hizo cargo de este proyecto, ha habido un patrón de violencia, intimidación y criminalización contra la población local que se opone a la minería, incluyendo el asesinato de ocho defensores de derechos humanos y opositores activos al proyecto, además de que siete manifestantes pacíficos fueron baleados fuera de la mina en 2013 por la seguridad privada de la mina, por lo cual, la empresa está siendo demandada en los tribunales de Columbia Británica.

Hacemos un llamado a las Embajadas de Canadá y Estados Unidos para que insistan en que se siga el debido proceso del caso ante el CSJ y que no intervengan en nombre de Tahoe Resources con las autoridades guatemaltecas. También le pedimos que insista en que la empresa, sus proveedores, trabajadores y otros asociados desistan de su campaña de difamación y todo intento de criminalizar al pueblo Xinka, al Parlamento Xinka, a los residentes locales de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, CALAS y sus miembros. Demasiadas personas han sido asesinadas, heridas, perseguidas legalmente por motivos falsos y sus comunidades sometidas a vigilancia policial y militar permanente. Además, les instamos, públicamente ya través de los canales diplomáticos, a demostrar apoyo a la legitimidad e importancia de los esfuerzos de las organizaciones, comunidades e individuos indígenas y no indígenas que defienden pacíficamente su bienestar y un medio ambiente seguro de los daños que les afectan de la mina Escobal de Tahoe Resources.

Agradecemos su atención a esta carta y su rápida y sustantiva respuesta.

Firmado:

ORGANIZACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Chicago Religious Leadership Network on Latin America

Center for International Environmental Law (CIEL)

Davis Standing Rock Divestment Action Group

Denver Justice and Peace Committee

EarthNexus

Friends of the Earth

Global Exchange

Guatemala Education Action Project (G.E.A.P.)

Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham

Marin Task Force on the Americas

Metro New York Catholic Climate Movement

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)

New Mayas Society

NH-VT Guatemala Accompaniment Project

Nicaragua Center for Community Action (NICCA)

Oberlin Students in Solidarity with the People of Guatemala (OSSGUA)

Partners for Arlington and Guatemala (PAG)

Portland Central America Solidarity Committee (PCASC)  
Rochester Committee on Latin America (ROCLA)  
Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA)  
Sister Parish, Inc.  
Swift Foundation  
Women's International League of Peace & Freedom  
Unitarian Universalist Church of Arlington, Virginia, Senior Minister Aaron McEmrys

#### ORGANIZACIONES DE CANADÁ

Atlantic Regional Solidarity Network  
BC- CASA/Café Justicia  
Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Montreal  
Common Frontiers  
Education in Action, Ottawa  
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network  
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)  
Mining Justice Action Committee (MJAC in Victoria)  
Mining Justice Alliance  
MiningWatch Canada  
Projet Accompagnement Québec-Guatemala  
Rights Action  
Streams of justice, Vancouver, BC

#### ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Asociación Q'anil, San Juan Sacatepéquez, Guatemala  
Associació Perifèries del Món, València, España  
Plataforma Internacional contra la Impunidad

Copia a:

#### Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala

Francisco Rivas  
6 avenida 13-71 zona 1  
Ciudad de Guatemala, C.P. 01001  
Guatemala  
Correol: smvasquez@mingob.gob.gt

#### Fiscal General de la República de Guatemala

Thelma Aldana  
15 avenida 15-16 zona 1  
Edificio Gerona 8º Nivel  
Ciudad de Guatemala, C.P. 01001

Guatemala  
Correo: [taldana@mp.gob.gt](mailto:taldana@mp.gob.gt)

Ministra Canadiense de Asuntos Exteriores y  
Hon. Chrystia Freeland  
Correo: [Chrystia.Freeland@parl.gc.ca](mailto:Chrystia.Freeland@parl.gc.ca)

Ministro Canadiense de Comercio Internacional  
Hon. François-Philippe Champagne  
Correo: [Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca](mailto:Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca)

Miembros del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento canadiense  
Presidente: Michael Levitt  
Correo: [Michael.Levitt@parl.gc.ca](mailto:Michael.Levitt@parl.gc.ca)

Miembros:  
Cheryl Hardcastle, [Cheryl.Hardcastle@parl.gc.ca](mailto:Cheryl.Hardcastle@parl.gc.ca)  
David Sweet, [david.sweet@parl.gc.ca](mailto:david.sweet@parl.gc.ca)  
David Anderson, [david.anderson@parl.gc.ca](mailto:david.anderson@parl.gc.ca)  
Peter Fragiskatos, [Peter.Fragiskatos@parl.gc.ca](mailto:Peter.Fragiskatos@parl.gc.ca)  
Iqra Khalid, [Iqra.Khalid@parl.gc.ca](mailto:Iqra.Khalid@parl.gc.ca)  
Marwan Tabbara, [Marwan.Tabbara@parl.gc.ca](mailto:Marwan.Tabbara@parl.gc.ca)